

Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.

## **Detención arbitraria y encarcelamiento injusto de mujer indígena en Querétaro, México**

**Información entregada al Sr. James Anaya, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; a la Sra. Gay McDougall, Experta independiente sobre cuestiones de las minorías; y al Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria, el 11 de mayo de 2009.**

*For an English translation of this document, please contact us and we will supply an English version within seven working days of the request.*

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) tiene conocimiento directo del siguiente caso de detención arbitraria, falta de debido proceso, encarcelamiento injusto y discriminación a la mujer indígena JACINTA FRANCISCO MARCIAL. Los hechos denunciados configuran violaciones a los derechos a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la no discriminación, a la igualdad ante los tribunales y a los derechos de los pueblos indígenas, consagrados en los artículos 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 5(a) de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y los artículos 3, 9, 10 y 12 del Convenio 169 de la OIT, todos instrumentos ratificados por el Estado mexicano.

### **a) Hechos:**

#### *Contexto*

Jacinta Francisco Marcial, conocida como Doña Jacinta, es una mujer mexicana indígena ñhã-ñhú (otomí). Ella tiene 45 años de edad, es madre de seis hijos y trabaja como vendedora de nieve y aguas frescas en la comunidad Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco de Bonfil, estado de Querétaro, México. La población del municipio es mayoritariamente indígena ñhã-ñhú (otomí) y vive en condiciones extremas de marginación, caracterizadas por la carencia de servicios básicos como agua potable y alcantarillado. La presencia de la población ñhã-ñhú es una razón de peso para que las actividades económicas predominantes sean la agricultura de subsistencia y el cuidado de ganado menor. Sin embargo en los últimos años esta actividad ha decaído debido a problemas de la estructura y del modelo económico. Lo que ha promovido el incremento de la actividad comercial, realizada a menudo de manera informal.

#### *Los hechos sucedidos el 26 de marzo de 2006*

El 26 de marzo de 2006, seis elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), sin identificarse como tales y sin portar uniforme, llegaron a la plaza central de la comunidad de Santiago Mexquititlán y despojaron a diversos comerciantes de sus mercancías. Varios de los comerciantes afectados comenzaron a protestar. Ante esta situación, el Jefe Regional de la AFI y un Agente del Ministerio Público Federal llegaron a ofrecer a los comerciantes el pago en efectivo de los daños ocasionados. Como debían trasladarse a conseguir la cantidad ofrecida, las autoridades ordenaron al agente de la

AFI Jorge Ernesto Cervantes Peñuelas que se quedara en el pueblo como “garantía” de su regreso. Según testimonios, el agente que se quedó en el pueblo estuvo todo el tiempo comunicado, tuvo libertad deambulatoria y jamás fue violentado en su integridad física.

Tres horas después, los elementos de la AFI arribaron al pueblo. Con ellos llegó al pueblo un periodista del diario “Noticias” de Querétaro. Ante la inusual reunión de personas, algunos pobladores se acercaron a ver lo que ocurría; entre esas personas se encontraba Doña Jacinta Francisco Marcial, quien atendía su puesto de aguas frescas. Fue en ese instante que el reportero del periódico “Noticias” tomó unas fotografías sobre los hechos, en las cuales apareció Doña Jacinta.

Tras entregar el dinero, las fuerzas de seguridad dejaron la comunidad aproximadamente a las 19:00 horas; iba con ellos el agente de la AFI Jorge E. Cervantes Peñuelas, quien se había reintegrado al grupo aproximadamente desde las 18:00 horas. No se presentaron mayores incidentes. Ninguna persona fue detenida.

Más de cuatro meses después, el 3 de agosto de 2006, un grupo de personas vestidas de civil llegaron a casa de Doña Jacinta, buscándola. Le dijeron que la tenían que llevar a declarar a la ciudad de Querétaro, por un asunto relacionado con la poda de un árbol. Al saberse ella inocente, acompañó voluntariamente a esas personas, quienes la trasladaron al Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Querétaro en un vehículo sin identificación oficial. Al llegar, fue presentada ante los medios de comunicación, sin contar con la asesoría de su defensor público y sin entender el idioma español declaró sin saber de qué la acusaba. Fue hasta que llegó el Centro de Readaptación Social de San José el Alto, Querétaro, cuando, con la ayuda de las internas supo que la acusaban a ella y a otras dos mujeres de haber “secuestrado” a los AFIs durante los hechos ocurridos el 26 de marzo de 2006.

#### *Proceso penal injusto y discriminatorio contra Doña Jacinta y condena a 21 años de prisión*

La orden de aprehensión girada en contra de Doña Jacinta tiene su raíz en una averiguación previa caracterizada por irregularidades. El mismo día de los hechos (el 26 de marzo de 2006) los agentes de la AFI rindieron su “parte informativo” ante el Ministerio Público en el que ya decía que habían sido secuestrados. Al día después de los hechos (el 27 de marzo de 2006), algunos elementos de la AFI ratificaron sus declaraciones ante el Ministerio Público Federal afirmando que habían sido secuestrados por pobladores de la comunidad de Santiago Mexquititlán. Ninguno de ellos señaló a Doña Jacinta como responsable. Sin embargo, posteriormente se integró al expediente de la averiguación previa las fotos de Doña Jacinta tomadas por el reportero del periódico “Noticias”. Con base en dichas fotos, los elementos de la AFI ampliaron su declaración a más de un mes de los hechos para señalar a Doña Jacinta como responsable de haber secuestrado y amenazado verbalmente al agente Jorge E. Cervantes Peñuelas, pese a que en su declaración inicial los agentes no habían identificado a ninguna mujer indígena como presunta responsable. Por su parte, el agente Cervantes Peñuelas, el que supuestamente se quedó como *garantía* en el pueblo y quien se asumió como víctima del delito, ni mencionó ni identificó a Doña Jacinta.

Como resultado de dicho proceso, se ejercitó acción penal contra Doña Jacinta y dos coacusadas, Alberta Alcántara y Teresa González, allegando el pliego de consignación que se radicó en el Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Querétaro. Se emitió una orden de aprehensión el 4 de julio de 2006, misma que se cumplió el 3 de agosto del mismo año.

Cabe señalar que la detención de Doña Jacinta se realizó bajo engaños, pues le dijeron que tenía que declarar por haber derribado un árbol. Al no haber informado a Doña Jacinta de las razones por su detención y los cargos formulados en su contra, se violentaron los artículos 9(2) y 14(3a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

El 9 de agosto de 2006, se dictó auto de formal prisión en contra de la señora Jacinta y sus coacusadas. Durante el proceso penal, Doña Jacinta fue representada por un defensor de oficio que no hacía valer su derecho a un intérprete, por lo cual Doña Jacinta no podía entender plenamente lo que sucedía en el juicio, así violentando el artículo 14(3f) del PIDCP y el artículo 12 del Convenio 169 de la OIT.

El 19 de diciembre de 2008, se dictó sentencia condenatoria a Doña Jacinta, dictándole una pena de 21 años de prisión y dos mil días de multa, equivalentes a 91,620 pesos (más de EU \$6000); la sentencia para sus coacusadas fue en el mismo sentido, imputándolas incluso la reparación del daño. Es importante mencionar que existían diversos testimoniales que confirmaban que Doña Jacinta no había participado de manera alguna en el diálogo sostenido por comerciantes y autoridades el 26 de marzo de 2006, sin embargo a dichos testimoniales el Juez de proceso les negó valor probatorio. De la misma forma, también fue desestimada la ampliación de declaración de una coacusada en la que deslindaba a Doña Jacinta de los hechos.

En el expediente y la sentencia condenatoria se puede apreciar que al aplicar la legislación penal a Doña Jacinta, las autoridades no tomaron debidamente en cuenta las costumbres o las características económicas, sociales y culturales del pueblo indígena ñhã-ñhú, ni mucho menos dieron la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento, violentando los artículos 9(2), 10(1) y 10(2) del Convenio 169 de la OIT.

La totalidad de los actos aquí descritos, al poner en una situación de vulnerabilidad y desventaja a la víctima por ser mujer indígena, resultando en daños graves a la misma en la forma de una sentencia condenatoria notoriamente injusta, configuran violaciones al derecho a la igualdad ante los tribunales y la no discriminación, consagrado en los artículos 14(1) y 2 del PIDCP, el artículo 5(a) de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y el artículo 3(a) del Convenio 169 de la OIT.

#### **b) Recursos internos interpuestos:**

El 22 de diciembre de 2008, Doña Jacinta interpuso la apelación contra la sentencia condenatoria. Ésta recayó en el Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito, con sede en Querétaro, a cargo del magistrado Hanz Eduardo López Muñoz.

Las numerosas irregularidades del proceso permitían al magistrado restituir los derechos de Jacinta para modificar la sentencia y devolverle su libertad. No obstante, en su resolución de fecha 7 de abril el magistrado López Muñoz se limitó a ordenar la reposición del procedimiento; es decir, regresó el expediente al Juez Cuarto de Distrito en Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi, para que nuevamente se desahoguen algunos careos procesales entre los propios AFIS y algunos testigos. Con esto, la misma autoridad que condenó a Jacinta a más de veinte años de prisión tendrá nuevamente en sus manos su libertad.

El fallo del Tribunal Unitario revictimiza a Jacinta al posponer, casi indefinidamente, la resolución sobre el fondo del caso. En efecto, si se considera que algunos de los careos ordenados por el magistrado requieren que los agentes federales, que se dicen víctimas de Jacinta, acudan al Juzgado Cuarto, el juicio puede prolongarse considerablemente: durante el juicio estos fueron infructuosamente llamados para careos en más de quince ocasiones, lo que muestra su desinterés absoluto en el proceso y su negativa a colaborar con el cabal esclarecimiento de los hechos.

Es así que actualmente Doña Jacinta Francisco Marcial sigue injustamente en prisión preventiva sin sentencia firme, acusada del delito de privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro, con la agravante de ser cometido contra servidores públicos (previsto y sancionado en el artículo 366 fracción I inciso (a) en relación con el 366 fracción II inciso (c) así como la agravante de delito

cometido contra servidor público dispuesta en el artículo 189 del Código Penal Federal).

Cabe mencionar que el defensor particular de las señoras Alberta Alcántara y Teresa González, coacusadas de Doña Jacinta, interpuso en el año de 2007 una denuncia penal por hechos posiblemente constitutivos de delito en contra de los agentes federales de investigación, del agente del Ministerio Público Federal y del Juez Cuarto de Distrito, ya que las autoridades administrativas realizaron acciones al margen de la ley y sin diligencia, omitiendo mencionar, incluso, su participación visible en los hechos; y en cuanto al Juez Cuarto, por avalar la mala integración de la averiguación previa y estar supuestamente en colusión con el agente del Ministerio Público Federal al dictar el auto de formal prisión. Esta denuncia sigue en trámite dentro de la Procuraduría General de la República.

### **c) Observaciones:**

#### *Sobre el caso de Doña Jacinta*

La inocencia de Doña Jacinta se encuentra plenamente sustentada. Además de que lo ocurrido en la reacción de los comerciantes contra los abusos de los agentes de la AFI, no puede encuadrarse como secuestro sino mediante una deliberada criminalización de la protesta social, Doña Jacinta Francisco Marcial ni siquiera participó en los hechos, sino que, al observar una situación inusitada, simplemente tuvo la curiosidad de acercarse para enterarse del asunto. Además, es inverosímil que se pudiera retener a agentes facultados para el uso de la fuerza pública que estaban capacitados física y materialmente para responder cualquier agresión posible. Menos creíble aún es que tres mujeres, como Doña Jacinta (de 45 años de edad), hayan podido “secuestrar” a seis elementos armados. Finalmente, la señora Jacinta hablaba la lengua ñhã-ñhú (otomí), por lo que era incapaz de comunicarse fluidamente en castellano, lo que quedó corroborado durante el juicio con un dictamen pericial en materia de antropología que se le practicó por expertos de la CDI (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas); en consecuencia, es casi imposible que ella amenazara verbalmente al agente Cervantes Peñuelas en castellano, como se había afirmado en las declaraciones ampliadas de los agentes de la AFI.

Cabe notar que las únicas pruebas que obran en contra de Doña Jacinta, además de las fotografías del periódico “Noticias”, fueron declaraciones aportadas por los propios AFIs, e integradas por un agente del Ministerio Público de la Federación que había participado en los hechos. En esas condiciones, es posible presumir que ambas autoridades actuaron de común acuerdo para imputar falsamente delitos a algunos tanguistas de Santiago Mexquititlán, en represalia por la forma en que reaccionaron a los abusos de la AFI. Más grave aún es que se impute a personas inocentes un delito que despierta el mayor repudio social como es el secuestro.

#### *Sobre la vulnerabilidad de las mujeres indígenas frente al sistema de justicia*

Para el Centro Prodh, el caso de Doña Jacinta es paradigmático de la vulnerabilidad de las mujeres indígenas frente a las deficiencias del sistema de justicia vigente. Efectivamente, son las mujeres indígenas quienes sufren con mayor intensidad los fenómenos de exclusión y marginación del sistema de justicia, al presentarse en sus casos una triple discriminación: por ser indígena, ser mujer y ser pobre.<sup>1</sup> Por ejemplo, es común en México que una persona indígena procesada penalmente no tenga un intérprete, como sucedió en el caso de Doña Jacinta.<sup>2</sup>

---

1 Bonfil Sánchez, Paloma, Martínez Medrano, Rosa Elvira (coord.), *Diagnóstico sobre la discriminación de las mujeres indígenas*, CDI 2003, pp 350 y ss.

2 Garantías procesales reconocidas en los artículos 2, 14 y 16 Constitucionales; artículo 12 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; artículos 8, 9 y 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Sobre esta situación particular el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial ha recomendado al Gobierno Mexicano garantizar el derecho de los pueblos indígenas al uso de intérpretes y de defensores de oficio conocedores del idioma, cultura y costumbres de las comunidades indígenas en el transcurso de procedimientos judiciales (observaciones finales del Comité a México,

Lo anterior, aunado a las deficiencias de un modelo de justicia penal en el que subsistían elementos inquisitivos. En el proceso que se le siguió el Ministerio Público preconstituyó todos los elementos probatorios de cargo en ausencia de control jurisdiccional, haciendo evidente la desigualdad procesal en que se encuentra la inculpada; el juez, por su parte, se limitó a confirmar la validez de dichos elementos sin que ante su presencia se haya desahogado una sola prueba que confirmara la responsabilidad penal de Doña Jacinta. Inclusive, cuando tuvo ante sí evidencia de la inocencia de la señora se negó a reconocerle valor probatorio.

Por otro lado, en la apelación, el magistrado dio razón a la defensa ya que reconoció abiertamente que existen “contradicciones sustanciales” en los testimonios de los seis agentes federales de investigación que dicen haber sido “secuestrados” por Jacinta. No obstante, ante las contradicciones, no absolvió sino que optó por perpetuar el encarcelamiento injusto de la víctima.

**d) Petitorios:**

Por todo lo expuesto, solicitamos al Relator, a la Experta Independiente y al Grupo de Trabajo que:

- a) Soliciten al Estado que otorgue la libertad inmediata e incondicional a Doña Jacinta Francisco Marcial y a sus coacusadas, Alberta Alcántara y Teresa González, retirando todos los cargos imputados en su contra.**
- b) De caso contrario, requieran al Estado que resuelva el proceso seguido en contra de Doña Jacinta y a sus coacusadas, Alberta Alcántara y Teresa González, aplicando los estándares internacionales vigentes en materia de garantías judiciales, no discriminación, igualdad ante los tribunales y respeto a los derechos de los pueblos indígenas, y que informe sobre este proceso.**
- c) Requieran al Estado que investigue los hechos denunciados que dieron origen a las violaciones aquí descritas, con la finalidad de identificar a los responsables y sancionarlos.**
- d) Exhorten al Estado mexicano a que garantice los derechos de los pueblos indígenas, en particular los derechos necesarios para garantizar su igualdad ante los tribunales, como es el derecho a la no discriminación, de acuerdo a los estándares internacionales y en cumplimiento a los convenios suscritos y ratificados por el Estado.**

Stephanie Brewer  
Acción Legal Internacional  
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez  
Serapio Rendón No. 57-B, Colonia San Rafael,  
Delegación Cuauhtémoc, 06470  
México D.F.  
internacional2@centroprodh.org.mx  
TELS: (+52) (55) 5546 8217/ 5566 7854/ 5535 6892  
Ext: 107  
FAX: ext 108